



Asamblea Electoral

3 de mayo de 2018

Ante todo, reitero una vez más mi agradecimiento a esta asamblea, a todas y a todos, por vuestro apoyo y compromiso con el nuevo modelo de organización integrador y participativo que representa la CEV.

Hoy, además, agradezco vuestro unánime respaldo a mi continuidad al frente de este valiente proyecto que hemos consolidado con compromiso y responsabilidad.

Agradezco también la presencia del presidente de CEOE, Juan Rosell y sus vicepresidentes, Antonio Garamendi, presidente de CEPYME; Juan Pablo Lázaro, presidente de CEIM y José Vicente González; de la presidenta de la patronal de Baleares, CAEB, Carmen Planas; de los presidentes de CROEM y CEOE Aragón, José M^º Albarracín y Fernando Callizo; del presidente del Consejo Superior de Cámaras y de la Cámara de Valencia, José Vicente Morata; de los presidentes de las Cámaras de Castellón, Alcoy y Orihuela, María Dolores Guillamón, Pablo de Gracia y Mario Martínez; del presidente de AVE, Vicente Boluda; del presidente de Conexus, Manuel Broseta; de la presidenta del Club de Encuentro Manuel Broseta, Amparo Matés; de los presidentes de los puertos de Valencia, Castellón y Alicante, Aurelio Martínez, Francisco Toledo y Juan Antonio Gisbert; de los secretarios generales de UGT y CCOO, Ismael Sáez y Arturo León, y agradezco también la presencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig y sus consellers de Economía y Hacienda, Rafa Climent y Vicent Soler.

Con todos ellos y con sus organizaciones, la CEV mantiene una estrecha colaboración apoyando actuaciones y reivindicaciones y proponiendo iniciativas para la mejora de la economía, de la competitividad de nuestras empresas y del empleo. Para la mejora, en definitiva, de nuestro progreso económico y social.



Gracias por vuestra asistencia y por vuestra colaboración.

La gran participación de vocales en ésta y últimas asambleas es la mejor prueba de que tenemos entre manos un proyecto ilusionante.

Un proyecto que tiene como sólida base el interés compartido de las empresarias y empresarios de Castellón, Valencia y Alicante de contar con una organización autonómica integradora y participativa, solvente e independiente como ya es hoy la CEV.

Ese compromiso es lo que ha hecho posible el éxito de la CEV autonómica.

Las empresarias y empresarios de nuestra Comunidad estamos siendo ejemplo de que se pueden hacer las cosas de forma diferente a como se han hecho hasta ahora.

De que es más lo que nos une que lo que nos diferencia y de que queremos y podemos trabajar con estrategia y de forma coordinada para defender los intereses de esta Comunidad, de sus empresas y ciudadanos. Aquí, en la Comunitat Valenciana, y con aliados de otros territorios con intereses compartidos.

Hemos actuado de manera conjunta con la patronal CEIM en Madrid, con la presencia del Ministro de Fomento y el President de la Generalitat, posicionando nuestros puertos como acceso natural de Madrid y su hinterland. Igualmente hemos apoyado a AVE y participado en los actos que en defensa del Corredor Mediterráneo ha convocado en Tarragona, Sax, Almería, Murcia, Madrid, Valencia...

Hemos actuado conjuntamente también con CEOE Aragón en Teruel, con la patronal CEIN en Navarra, con la patronal FER de la Rioja, y con la vasca CONFEBASK en Bilbao, para reivindicar la mejora competitiva de la línea ferroviaria que conecta el Mediterráneo y el Cantábrico.

Y vamos a seguir buscando alianzas fuera de nuestras fronteras, en Bruselas, donde queremos reforzar la presencia de representantes empresariales valencianos porque allí se toman gran parte de las decisiones que nos afectan.

Hemos demostrado que si ponemos el acento en lo común podremos contribuir a superar esas diferencias que históricamente han hecho de nuestra Comunidad un territorio desvertebrado, con todo lo que ello supone de debilidad y pérdida de peso de sus reclamaciones, como muchas veces muchos nos lamentamos.

Un territorio desvertebrado, bien lo sabemos, es presa fácil de otros intereses que en nada tienen que ver con los de sus empresas y ciudadanos.

Las empresas de Alicante, Valencia y Castellón, las grandes y las pequeñas, sin distinción, y las empresas de cualquiera de sus comarcas, así como las empresas de Canadá, China o Japón, países de occidente y oriente que he tenido la oportunidad de visitar recientemente acompañando al presidente de la Generalitat, producen y comercializan en un escenario global.

Los diferentes mercados, sus sociedades y culturas están conectados e interrelacionados.

Este escenario global ofrece nuevas oportunidades para las empresas que ven ampliado su mercado y multiplicados sus potenciales clientes. Y plantea, además, retos globales como son el cambio climático y la cuarta revolución industrial o la educación y formación, el desempleo, la energía y la tensión geopolítica, entre otros... Retos globales que requieren acuerdos y compromisos supranacionales, y exigen, al tiempo, compromisos y actuaciones en la economía más local, en cada una de nuestras empresas.

Además de esos desafíos globales, en lo que se refiere a nuestro país, nos encontramos con nuestros particulares retos.

Con una economía que el FMI sitúa entre las más avanzadas del mundo, con una previsión de crecimiento para 2018 del 2,8%, superior a la de países como Alemania o Francia, nos encontramos con una inasumible tasa de desempleo superior al 16%, el doble de la media europea. Un desempleo que, además, tiene una mayor incidencia en los jóvenes, el 35,5% están desempleados, y en los parados de larga duración, más del 40% de los parados de entre 45 y 59 años lo son de larga duración. Estos datos nos dibujan un escenario inasumible desde una perspectiva económica y también social.

Nos encontramos también con la inestabilidad provocada por todo lo que viene sucediendo en Cataluña, una grave anomalía a la que debe ponerse fin con un gobierno legítimo que retome la vía del diálogo político y acabe con esta situación que bloquea la inversión, el crecimiento económico y fractura el mercado interior y la convivencia social.

Que se resuelva con diálogo y entendimiento, y en el marco de la legalidad, este largo conflicto, nos interesa a todos.

Y nos interesa también a todos que, una vez recuperada la estabilidad, la empresa y su competitividad pase a ser asunto prioritario en las agendas y que se adquieran compromisos, públicos y privados, que allanen el duro trabajo de las empresas en el mercado global.

De su competitividad en esos mercados depende la capacidad de nuestras empresas de generar empleo, riqueza y bienestar en sus entornos más locales.

Nos encontramos con un país que desde 1900 a 2015 ha multiplicado por nueve sus mayores, ya son el 18,7% de la población total. Además, tenemos menos nacimientos que en el siglo XVIII a pesar de que ahora tenemos una población cuatro veces mayor.

Este suicidio demográfico, como se viene a denominar, afecta a la viabilidad del sistema de pensiones, pero también al mercado de trabajo, a la gestión del capital humano, a la

productividad de las empresas, a los hábitos de consumo, la educación, la sanidad, la recaudación fiscal...

Nos encontramos, además, con Gobiernos, este y anteriores, de unos partidos políticos y de otros, que postergan sin argumentos la reforma del actual modelo de financiación autonómica, aunque nadie cuestiona, ni siquiera los que se resisten a su reforma, que se trata de un modelo desequilibrado y especialmente injusto con nuestra Comunidad y sus habitantes.

Este es, sin duda, un gran reto de nuestra Comunidad, de sus políticos, de sus agentes y de su sociedad, y nosotros como parte de la sociedad civil, ahí estamos para defender sus intereses y los de nuestros conciudadanos.

Recibimos unos 1.250 millones de euros anuales menos de lo que nos correspondería si percibiéramos la media que el resto de las Comunidades Autónomas del Régimen Común, unos 252 euros menos por habitante y año. Entre 2002 y 2016, los dos últimos periodos del sistema, infrafinanciación e intereses acumulados han supuesto una discriminación financiera de 19.000 millones de euros, cantidad equivalente a todo el presupuesto consolidado de la Generalitat para un ejercicio.

Esto es una constante desde los orígenes de los sistemas de financiación en la década de los ochenta y se ha mantenido durante décadas con diferentes gobiernos. Así que se ha convertido en un gravísimo problema de crónica infrafinanciación que ha supuesto un incremento insostenible de nuestro endeudamiento autonómico que se sitúa en el 42,5% del PIB.

Somos la comunidad con el mayor endeudamiento en términos de PIB y la segunda en términos de PIB per cápita. Y gran parte de esta deuda se debe a esta crónica infrafinanciación. Por eso también reclamamos una “quita” que compense esa discriminación y que sea equivalente a lo infrafinanciado y sus intereses.

A la infrafinanciación se suma, además, que, pese a que aportamos un 9,5% al PIB nacional, nuestra Comunidad tan solo recibe, de media, un 6% de las inversiones territorializables con cargo a los PGE. En el proyecto de presupuestos para 2018, pese a que estas inversiones crecen en nuestra Comunidad un 25%, nuestro peso es del 4,7% del total de las inversiones.

Inversiones tan necesarias para nuestras empresas, pero también para nuestros ciudadanos, como el tren de la costa, el transporte metropolitano, la incorporación del eje Alicante-Elche en la red del Corredor Mediterráneo con conexión al aeropuerto, la necesaria alta velocidad entre Alicante y Valencia, o la conversión de la N 232 en autovía A68, hacen que sea necesario una mayor atención en los presupuestos por parte del Gobierno; del Gobierno y de todos los partidos políticos valencianos con representación en el congreso de los diputados.

Es evidente que el criterio para esta distribución no se basa en parámetros económicos, sociales, regionales y de eficacia; que se imponen criterios políticos que ponen en evidencia nuestra debilidad como territorio.

Que deje de prevalecer lo político ante lo económico y racional es un asunto de capital importancia para las empresas y para nuestro territorio porque la financiación y las inversiones son claves para impulsar la competitividad de los territorios y sus empresas.

La infrafinanciación afecta sobremanera a las posibilidades presupuestarias de un Consell que destina más del 80% de su presupuesto a la prestación de los servicios públicos fundamentales, -sanidad, educación y servicios asistenciales- y ve limitado el margen para proponer y gestionar políticas de impulso de la economía que tanta falta nos hacen.

La reivindicación de reformar el vigente modelo ha conseguido como pocas veces ocurre en nuestra Comunidad concitar el consenso de políticos, organizaciones sindicales y empresariales, de toda la sociedad, que ha cerrado filas y exige un modelo equilibrado y

justo. Bien harían los políticos en no desatender una reclamación justa de toda una sociedad y evitar su desafecto y quién sabe si su radicalización.

Necesitamos una financiación justa porque el cambio de modelo productivo que tenemos planteado como reto en nuestra Comunidad, además de implicar a la iniciativa empresarial, requiere estímulo y orientación desde el ámbito público a través de propuestas concretas en materia de política industrial –sobre todo en los ámbitos de la digitalización, la innovación y la internacionalización- así como en materia fiscal, formativa y también social.

Por tanto, que este cambio de modelo que impulsamos sea una realidad y se consolide como base de un crecimiento económico sostenible implica en igual grado al sector privado, a las empresas, y al público, que debe adquirir compromisos con una asignación presupuestaria estable en el tiempo.

Un cambio de modelo económico no se consolida en una ni en dos legislaturas, ni tampoco se logra vía Decreto Ley; ojalá fuera así de fácil. Conseguir un crecimiento sostenido y sostenible para acabar con el exceso de paro y asegurar la estabilidad y el futuro del Estado de bienestar, objetivo de ese nuevo modelo, exige el compromiso de todos y exige también pactos políticos para que estos compromisos perduren en el medio y largo plazo.

Las palancas estratégicas para lograr ese objetivo son bien conocidas:

- Formación, en todos sus niveles y con impulso de la FP Dual
- I+D+i y mayor conexión entre el sistema de innovación y la empresa
- Internacionalización
- Aumento del tamaño empresarial para alcanzar la masa crítica necesaria para acceder a las tres palancas estratégicas anteriores.

Somos las empresas, y sus organizaciones, quienes tenemos la obligación, y el interés, de transitar a ese modelo más inteligente, sostenible y competitivo.

Sin embargo, desde el ámbito público debe abonarse el terreno. Tras delegar la política monetaria en el BCE y la política comercial en la Unión Europea, los instrumentos de política económica al alcance de nuestros niveles de Estado -central, autonómico y local- no se limitan a los de índole fiscal que, no obstante, pueden ser muy potentes y tienen su recorrido.

Existe todo un abanico de políticas horizontales -formación, I+D+i, internacionalización, aumento de tamaño empresarial e infraestructuras-, así como de políticas sectoriales -sector primario, industrial, construcción, turismo y energía- que, aplicadas con criterio y consenso, pueden aportar, y mucho, a la implementación del nuevo modelo.

A ellas apelamos, para ello contribuimos y con ellas lograremos avanzar en las distintas etapas de su implementación.

Es momento, por tanto, de alcanzar un acuerdo firme del sector público y el privado con la vista puesta más allá de horizontes electorales.

Solo así podremos materializar con éxito ese tránsito para ser más competitivos, generar empleo y que ese empleo sea de mayor calidad. Con ello habremos realizado una gran aportación a la sociedad y a su bienestar.

Las administraciones deben saber, y creerse, que cuentan con la empresa para avanzar en esta dirección, que somos una pieza fundamental del engranaje para asentar las bases de un crecimiento competitivo y sostenible.

La colaboración público-privada, por tanto, está llamada a jugar un importante papel en este proceso de transformación que necesita nuestra economía. La empresa es un aliado, un colaborador necesario y es, además, un buen referente para el sector público en su



pendiente reforma para la mejora de sus ratios de eficiencia, control de gasto, racionalización normativa y mayor control del cumplimiento de esta normativa.

Como he dicho al principio, y voy concluyendo, las empresarias y empresarios de esta Comunidad hemos dado ejemplo de compromiso y responsabilidad: hemos consolidado una CEV autonómica integradora e independiente.

No hemos tenido miedo al cambio, como apelaba nuestro presidente Juan Rosell en la Asamblea de CEOE. Hemos superado un viejo modelo organizativo inviable desde la perspectiva económica y también social. La fragmentación de aquellas obsoletas estructuras ha limitado nuestra capacidad de influencia en la escena política y empresarial nacional.

Queremos ser modelo también para todo el entramado asociativo de la Comunitat Valenciana, que tiene pendiente, aunque con avances en algunos sectores, su propia reestructuración e integración para orientar los recursos a prestar un servicio solvente a sus empresas asociadas y a no al mantenimiento de múltiples estructuras.

No tengáis miedo al cambio, ahí es donde se demuestran los verdaderos liderazgos. Nunca un mar en calma hizo un buen marinero y nosotros podemos demostrar que contamos con buenos marineros y grandes líderes. Nuestra Comunidad está plagada de ellos.

La CEV está ya en plenas facultades para aportar criterio y propuestas que faciliten el éxito de nuestras empresas en los mercados globales y hagan de nuestro territorio un enclave atractivo para la inversión autóctona y foránea.

Nuestra situación geoestratégica, nuestra estabilidad política, social y económica, nuestra diversificación productiva, nuestra apertura al exterior y nuestras excelentes infraestructuras son grandes bazas que juegan a nuestro favor.



Como siempre, tendemos la mano a las diferentes administraciones y a nuestros interlocutores para procurar ese éxito empresarial y social.

Abrimos una nueva etapa con la puesta en marcha de los Consejos Empresariales de Alicante, Castellón y Valencia, liderados por Rosana Perán, Sebastián Pla y Eva Blasco, a quienes agradezco muy sinceramente su compromiso con la CEV. Estos Consejos han celebrado sus primeras reuniones y trabajan ya en la identificación de sus respectivas prioridades territoriales. La unión en la defensa de los intereses generales empresariales de la Comunitat Valenciana no está reñida con la atención a las diferentes sensibilidades y necesidades territoriales.

Concluyo recordándoos que en el último trimestre del año celebraremos el acto conmemorativo de nuestro aniversario, nuestro 40+1, y reiterando mi agradecimiento, a todas y todos, vocales de la Asamblea e invitados, por estar hoy aquí.

Con todos seguiremos colaborando porque todos los que aquí estamos compartimos la responsabilidad de llevar a buen puerto los objetivos de mejora económica y social que inspiran el día a día de la CEV.